

¡VAYA UN PAR DE TRAMOSOS!

COMO tras una gran catástrofe, es imposible evaluar todavía la magnitud de los daños causados a la credibilidad de la democracia española por la consumada farsa, escenificada con más desvergüenza que convicción, por esa pareja de redomados politicastro, capaces de las maniobras más desaprensivas, con tal de servir el único objetivo común que les hermana: un apetito desordenado de poder personal.

Un historiador prestigioso exhumaba recientemente la negativa significación que los forcejeos en torno al decreto de disolución habían entrañado para la estabilidad de España. Lo que pudo ser en la España canovista un artificio útil para asentar una democracia incipiente y propiciar el bipartidismo degeneró en una injerencia que quebrantó los fundamentos de la Monarquía de Alfonso XIII y aún proyectaría su sombra sobre las prácticas de Niceto Alcalá Zamora.

Ló monstruoso es que cuando Su Majestad el Rey se atiene con el más cabal escrúpulo a la pauta rigurosa de sus funciones constitucionales; cuando ninguna previsión constitucional permitía imaginar esta asombrosa excursión hacia atrás por el túnel del tiempo histórico, González degrada su facultad —exclusiva— y su responsabilidad —exclusiva— de disolver las Cámaras para conseguir ventaja en sus indecentes chalanos con Pujol. Y para mayor inri, pone en escena la impostura de «abrir un turno de consultas» para simular la búsqueda de un consenso apócrifo sobre la expresión límite del disenso civilizado: la celebración de elecciones.

La degradación del papel del Parlamento en toda esta feria de correveidiles es sangrante. «Como pueden ustedes comprender, el señor Felipe González y yo el día que queramos vernos, nos veremos con toda comodidad, cuando nos convenga, y probablemente ustedes no se enterarán», declaraba con la mayor desfachatez Pujol en 1993.

Pero no es cierto que el que avisa no sea traidor. Pujol —y González— han traicionado la transparencia democrática; traicionaron a sus respectivos electorados; traicionaron los intereses de Cataluña y de España, subordinándolos a sus descarnadas ambiciones personales. Ahora, cuando los respecti-

vos intereses electorales pueden entrar en conflicto, convienen el divorcio controlado del matrimonio que nunca existió y, como en aquellas veladas de lucha libre del Campo del Gas, simulan aparatosas llaves, truculentas agresiones, cuidadosamente incruentas, en la esperanza de poder repetir la coyunda.

¡Que todo esto pueda hacerse en nombre de la «governabilidad» es un sarcasmo añadido! Una «governabilidad» que permitió a Pujol hacer de cirineo —y cómplice— de la saga infinita de las corrupciones socialistas, hasta que las escuchas del CESID dieron a Pujol el pretexto para componer el fingido gesto de ursulina: «Así no podemos seguir».

Que un gobernante responsable anticipe siete o nueve meses la fecha de la disolución supone la consagración de la provisionalidad. Como escribía ayer en nuestras páginas Luis González Seara, «el Estado está desapareciendo por la alcantarilla».

LA ÚLTIMA FICHA

DESPUÉS de la declaración del comisario de Policía Miguel Planchuelo, que implicaba al Gobierno en la trama de los GAL, y de la que ayer efectuó ante el juez Garzón el ex director general de la Seguridad del Estado, Julián San Cristóbal, avanza el fatídico —para Felipe González— «efecto dominó», cuya última ficha, pronta ya a caer es el propio presidente del Gobierno.

No es preciso invocar el equivocado y repugnante caso GAL para exigir la dimisión de González. Ya debiera haberlo hecho por su responsabilidad contraída en los casos Rubio, Roldán, Filesa, fondos reservados y CESID. Y, más sencillamente, por haber mentado a la Nación y haber permitido que se instalara la corrupción en las instituciones clave del Estado. Pero el asunto GAL, al margen de la atenuación de la responsabilidad que gran parte de la opinión pública le otorga por tratarse de una respuesta —errónea y delin-

cuente, sin duda— a una ofensiva criminal de los únicos profesionales de la muerte que habitan España y que son los pistoleros de ETA, demuestra la responsabilidad política de González en la comisión de crímenes de Estado, tanto si organizó la trama, como si la toleró, como si se limitó a no enterarse hasta que lo publicó la Prensa. La diferencia, no insignificante, es que en las dos primeras hipótesis habría incurrido además en responsabilidad criminal.

Otra grave responsabilidad en la que ha incurrido González con su numantina renuencia a dimitir es en haber permitido la escalada del caso GAL, que sus enemigos no han dudado en utilizar para un fin con el que coincide la mayoría de los ciudadanos, y que ha entrañado un gravísimo revés en la lucha contraterrorista y un daño muy difícilmente reparable en el entramado institucional del Estado de Derecho. Aunque los medios utilizados hayan sido más que discutibles —ayer denunciaba ABC la «tortura legal» a la que ha sido sometido Planchuelo hasta obtener su «arrepentimiento»—, sólo puede invocar la existencia de una conspiración quien es inocente de los escándalos que se le imputan. Y, con inexorable contundencia, se han ido confirmando todos ellos, para desgracia de la teoría conspirativa puesta en circulación por el felipismo y sus terminales informativas y de propaganda.

Han sido demasiados los errores de González. El final de la partida está cerca. Tal vez la última jugada le corresponde a Pujol. Si, siguiendo las pretensiones de sus socios de Unión, le niega sin condiciones el apoyo a los Presupuestos del 96, González habría perdido definitivamente una partida que ha prolongado de forma insufrible en contra de los intereses nacionales. Lo peor es que ya no hay soluciones buenas sino sólo remedios de urgencia. Las elecciones generales ya debían haber sido convocadas. Lo mejor, o lo menos malo, es, como pretende el Partido Popular, hacerlo cuanto antes. El felipismo deja una herencia nefasta, con un Estado semiderruido sumido en la corrupción y el desprestigio internacional y una democracia perturbada.

PARTIDO NACIONAL

UNA de las cuestiones en litigio, y no la menor, en las polémicas entre el PP de Baleares y José María Aznar era el carácter «nacional» del partido. Ese principio de identidad ha quedado nítidamente claro. Aznar propondrá hoy al Comité Ejecutivo Nacional sendas resoluciones para que el Comité Ejecutivo regional y el grupo parlamentario autonómico procedan con rapidez a la elección de nuevo presidente del PP de Baleares y del grupo parlamentario en la autonomía. El presidente nacional del PP refuerza así su autoridad sobre la estructura del partido por encima de liderazgos regionales. Tanto en el informe interno como en las muestras de apoyo que los «populares» de Baleares han dado a Gabriel Cañellas hay una salida digna. Ayer mismo, Aznar tuvo palabras de elogio tanto para su gestión como para su gesto de presentar la dimisión. Es posible que además mantenga su influencia en el PP balear, pero lo que ha quedado como resultado político es que el proceso de «califatos» socialistas no entra en los esquemas de José María Aznar.

ABC

Presidente-Editor
GUILLERMO LUCA DE TENA

Director
LUIS MARIA ANSON

Director de ABC de Sevilla

Francisco Gutiérrez-Alamán,
Subdirectores: M. Ramírez, J. J. Latorre

Subdirectores

J. Vila, S. Calero, J. Javáboves, J. Amado,
T. Cuesta, E. Contreras, B. Berastálegui

Jefes de Redacción: A. A. González R. Gutiérrez, V. A. Pérez (Comunicación), J. A. Álvarez-García (Cultura y Comunicación), J. C. Aznar (E. Españolas), A. Fernández (Economía), M. A. Ferrás (Edición Gráfica), C. Martínez (Edición), C. Naves (Música), E. Ortega (Deportes), L. J. Parada (Opinión), R. Pérez-Muñoz (Internacional), C. Pizarro (Opinión), F. Ruiz (Quincalla), J. A. Sánchez (Instrumento), A. Sánchez (Deportes), J. A. Serrás (Internacional), J. A. Vera-Gil (Deportes), V. Zabala (Internacional), J. N. Zúñiga (Internacional). Secciones: Pedro Conal (ABC de las Artes), Nona Aguiar (ABC Literaria), J. Rubio (Arte), F. Meruenda (Cataluña), J. M. Páez-Rúa (Deportes), R. Rey, J. Espino (Deportes), S. Guzmán (Cultura y Comunicación), J. G. Calero (Cultura), A. Puente (Deportes), J. C. Díaz (Deportes), I. Serrano (Sociedad), J. L. G. Sotoca (Economía), A. Yáñez (Edición Aérea), J. Badía (Educación), E. R. Martínez (Educación), J. García (Gráfico), M. Savelleira (Internacional), G. Alonso (ABC de la Música), M. Aznar (Nacional), S. Martín (Religión), E. L. Romero (Sociedad), G. Alonso (Sociedad), R. Domínguez (Sociedad), M. Tourn (Periodismo), E. L. Peres (Periodismo), M. J. Méndez (Vida Social).

Prensa Española, S. A.

Consejero Delegado: Jesús Fernández-Miranda

Director General: José Manuel Murie

Subdirectores Generales: J. M. Sánchez-Palencia (Comercial), S. Barro (Técnico), C. Conal (Personal). Directores: J. Cuesta (Publicidad), J. M. Martín-García (Comercial), M. Sánchez-Franco (Vida Social), E. Méndez (Deportes). Redacción, Administración y Talleres: Juan Ignacio Luca de Tena, número 7, 28027 Madrid. Teléfonos centralita: 339 90 00. Publicación: 339 81 42. Suscripciones: 339 80 11. Telefax Redacción: 330 35 35 y 330 36 35. Telefax Publicidad: 339 90 50. Año-Letra: 43.

Prensa Española, S. A.